

## DILIGENCIAS

*Practicadas en la tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de la acusacion por faltas de oficio, contra el Licenciado Don Leonides Torres que funcionaba de Magistrado del Tribunal de Circuito de Guadalajara.*

## PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: Que con fecha 20 de Setiembre del año de 1871, el C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito de Guadalajara, elevó una queja á esa Suprema Corte contra el Magistrado de Circuito de ese mismo Tribunal, Licenciado Leonides Torres, por faltas en el ejercicio de la magistratura. Dicho negocio se mandó turnar á esa tercera Sala, la que á su vez dispuso, se pasara al estudio del que suscribe para que promoviera en justicia.

Las faltas de que el Promotor fiscal acusa al Licenciado Torres, son las siguientes: Primero: que en el año de 1864, habiendo practicado una operacion de redencion la Señora Doña Guadalupe Narvaez respecto de una casa, y habiendo ofrecido pagar el precio en ciertos plazos, esa misma casa fué despues vendida (en el año citado), á Don Antonio Rojas, poniéndolo en posesion de ella, y declarando nula la primera operacion hecha á favor de la Narvaez. En el año de 1868, la Sra Narvaez promovió un litigio contra la testamentaria de Rojas sobre posesion y propiedad de aquella finca, en cuyo litigio la demandante obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia. Que en esa virtud, la compradora quedó obligada á satisfacer los dos mil cuatrocientos pesos del precio, en los plazos y modo estipulados en la escritura de venta. Mas no habiendo cumplido, la Jefatura de Hacienda procedió á realizar el cobro con el aumento ó recargo, á que la Sra. Narvaez había da-

do lugar por su morosidad; y habiéndose resistido á pagar, el referido Promotor exigió en el juicio correspondiente, que la deudora satisficiera los dos mil cuatrocientos pesos del capital, con los recargos de un cincuenta por ciento en la parte de créditos, y un veinticinco en la de numerario, de conformidad con lo prevenido en los artículos 36 y 37 de la ley de 5 de Febrero de 1831.

Pero el Magistrado Don Leonides Torres, declaró en su sentencia (de conformidad con la de primera instancia), que la Señora Narvaez, solamente estaba obligada á satisfacer una quinta parte en numerario y tres en créditos, absolviéndola de las multas en que á juicio del Promotor había incurrido. Segunda falta: Que el Licenciado Torres, con infraccion de la circular de esta Suprema Corte, recordando la obligacion en que están los Jueces de cumplir con el artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, no había dado y se resistía á dar esas noticias. Tercera: Que habiendo recusado dicho Promotor, con causa al Sr. Licenciado Torres en un negocio de comiso; este amenazó de muerte al Promotor. Cuarta: Haberse ausentado por bastante tiempo del lugar de donde está el Tribunal, sin acudir por lo mismo al despacho. Quinta: Haber convertido el Tribunal en residencia de un círculo puramente político. Sexta: No despachar por sí mismo el Señor Torres los negocios, á causa de impericia. Séptima: Conspirar segun asegura la fama pública, contra el Supremo Magistrado de la República, que á la fecha de la acusacion la era el Señor D. Benito Juárez. Esta acusacion fué ampliada en 27 del citado Setiembre, en los términos que se advierten á fojas 17 del expediente. Pedido informe al Magistrado Torres, esto lo rindió justificado y obra á fojas 26 del expediente.

El fiscal al examinarlo, nota que están contestados satisfactoriamente los artículos de acusacion, en cuanto á las infracciones de la ley; y en cuanto á lo demas, como conspiracion y otros, ya desde el momento

de inculparse la queja se comprende que vá fundada en bases muy débiles; pero aun suponiendo que la conspiracion estuviera plenamente comprobada, lo que está muy lejos de ser así, por la ley de amnistía quedaba fuera del resorte del Tribunal. Pero tambien advierte el fiscal, que el Sr. Torres, al dirigirse á la Suprema Corte, ha olvidado los respetos y miramientos que debe guardarle y á lo que está obligado, no solamente por urbanidad y buen porte social, sino por provenírsele así los artículos 166 y 168 de la ley de 4 de Mayo de 1857, ademas de otras disposiciones muy antiguas que pudieran citarse.

El dialecto que el Señor Torres emplea en su citado informe, es muy ageno del decoro y respeto que se merece el primer Tribunal de la Federacion. El suscrito desea que en este punto, se haga al Licenciado Don Leonides Torres alguna demostracion que le sirva de escarmiento y reprima en otros, faltas semejantes. En resumen, el fiscal concluye con las proposiciones siguientes. Primera: Se declara: que segun la ley de responsabilidades de las Cortes Españolas, no hay un mérito bastante para abrir un juicio de responsabilidad, contra el Licenciado D. Leonides Torres, á consecuencia de la queja que contra él elevó el Promotor fiscal del Tribunal de Circuito de Guadalajara. Segundo: Se le extraña por los términos en que está producido el informe que el expresado Licenciado Torres, rindió á la tercera Sala de la Suprema Corte.

México, Mayo 23 de 1873.—*Altamirano.*

Es copia simple que certifico. México, 19 de Agosto de 1873.—*M. Hernandez de Villareal.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 25 de 1873.—Vistas las presentes diligencias practicadas en esta 3ª Sala de la Corte Suprema de Justicia, con

motivo de la acusacion que por faltas de oficio formalizó contra el Lic. D. Leonides Torres, que funcionaba de Magistrado del Tribunal de Circuito de Guadalajara, el Lic. D. Juan Robles Martinez, como Promotor del mismo Tribunal. Visto el escrito de acusacion y el de ampliacion que de ella se hizo despues; el informe que produjo para su justificacion el Magistrado expresado, y el pedimento del C. Fiscal; y considerando: que de estas diligencias no aparecen comprobados los cargos de infracciones á las leyes á que se refieren los artículos de la misma acusacion; pues en efecto, el hecho de no haberse sentenciado el negocio de la Señora Narvaez de conformidad con el pedimento del Promotor, no es una causa legal de responsabilidad para el Juez que desistió del parecer fiscal; que el delito político que se imputa al Magistrado Torres de haber conspirado contra el C. Presidente de la República, no ha sido denunciado ni justificado en debida forma, y aun cuando lo estuviese, la ley de amnistía podría amparar al acusado y quedar por lo mismo ese artículo de acusacion sin ser un verdadero cargo; que los demás artículos de la acusacion repetida y los de su ampliacion posterior, son débiles en su base desde que se inició la queja, y han sido contestados satisfactoriamente por el acusado.—Por todo lo expuesto, de conformidad con el pedimento del C. Fiscal, y con fundamento de la parte final del artículo 14 de la ley de 24 de Marzo de 1813, se resuelve lo siguiente: Primero: no hay méritos para declarar con lugar á formacion de causa al Lic. D. Leonides Torres, acusado en el desempeño de las funciones de Magistrado del Tribunal de Circuito de Guadalajara, por el Lic. D. Juan Robles Martinez que desempeñaba la Promotoría fiscal del mismo Tribunal. Segundo: adviértase al Lic. Torres que ha debido no expresarse en sus escritos como lo ha hecho, en atencion á que los términos de la defensa han de ser adecuados siempre al respeto y decoro que

deben guardarse á este Tribunal Supremo de Justicia. Tercero: lígase á las partes por conducto del Tribunal de Circuito de Guadalajara, remitiéndole copia certificada de este auto, y archívense á su vez estas diligencias.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—Por el C. secretario, *Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, 12 de Agosto de 1873. Por el C. secretario, *Manuel Fernandez Villareal*, oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juegado 2º de Distrito de México por D. Refugio Gutierrez, contra el Ayuntamiento de Tacubaya que le impone una multa de veinticinco pesos, por haber sembrado en los terrenos del rancho de Nápoles.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Refugio José Gutierrez contra una determinación del ayuntamiento de Tacubaya, imponiéndole una multa de veinticinco pesos por haber sembrado en los terrenos del rancho de Nápoles que fueron destinados para la formación de una colonia por su anterior dueño, D. Enrique Beale, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: Que la justificación de vd. se ha de servir declarar en definitiva, que la justicia federal lampara

y protege al expresado C. Refugio Gutierrez, contra la determinación de que se queja, porque con ella se violan especialmente en su persona, las garantías individuales que otorga el art. 16 de la Constitución, en virtud de que tal acto importa un ataque al derecho de propiedad del mencionado ciudadano sobre los terrenos de que se le prohíbe usar, por las razones que para breve tiempo á manifestar. La razón en que se apoya consiste, en que los terrenos sembrados por el quejoso, estando destinados para el uso público de tránsito, como calles de la colonia que se proyectó establecer en ellos, en virtud de la concesión que para ese objeto obtuvo el finado D. Enrique Beale del Supremo Gobierno, no han podido aprovecharse en beneficio propio de Gutierrez exclusivamente, sin incurrir en la pena que le ha impuesto esa corporación, usando de las facultades que la ley le concede; mas como de las pruebas que se han rendido por el que suscribe resulta, que la mencionada colonia no ha llegado á establecerse, quedando el terreno en el mismo estado que antes tenía como propio para la labranza; y por otra parte, según manifiesta la comunicación del C. Presidente del Ayuntamiento de México que obra en autos, la hacienda de San Borja y sus pertenencias, entre las cuales está comprendido el repetido rancho de Nápoles, corresponden á la Municipalidad de ese pueblo, es claro, que aun bajo este aspecto el Ayuntamiento de Tacubaya no tiene jurisdicción sobre los vecinos de otra Municipalidad, y por consiguiente, al imponerle la pena de que se queja el C. Gutierrez, ha violado en su persona las garantías que otorga el art. 16 de la Constitución, tanto porque se le priva el uso libre de su propiedad, cuanto porque esta se encuentra ubicada fuera de sus límites hasta donde alcanza su jurisdicción. Por estas consideraciones, que se desprenden naturalmente de las diversas constancias de autos, concluye el que suscribe reproduciendo la petición que tiene hecha al principio, sobre que es